

LA TERTULIA.

DIARIO PROGRESISTA-DEMOCRÁTICO DE LA MAÑANA.

Miércoles 18 de Diciembre de 1872.

NÚM. 337.

LA TERTULIA.

MADRID 18 DE DICIEMBRE DE 1872.

ADVERTENCIA.

Las oficinas de este periódico se han trasladado a la calle de Barrio Nuevo, número 2, principal, esquina a la Concepción Gerónima, a donde deberán dirigirse la correspondencia y los números de nuestros colegas que nos honran con el cambio.

CRÓNICA PARLAMENTARIA.

CONGRESO.

UN DISCURSO IMPORTANTÍSIMO.

Después de haber trascurrido la mayor parte de la sesión de ayer tarde con poca animación y ocupada en el debate relativo al abandono del Peñón de la Gómera, animados a última hora el salón de sesiones con la presencia del señor presidente del Consejo de ministros, que acudía a dar cumplida respuesta a las preguntas hechas por el señor Bugallal antes de entrar la Cámara en la orden del día.

Como en el lugar correspondiente verán nuestros lectores, las preguntas del Sr. Bugallal se encaminaban a pedir explicaciones al gobierno sobre el estado de alarma en que se encuentra la Península, y sobre la extensión y alcance de las reformas para Ultramar proyectadas, partiendo del supuesto gratuito de que éstas son las verdaderas causas de aquel estado, cuya gravedad exageró, como no podía menos de hacerlo en su calidad de conservador, y conservador alfonso.

Pocas veces hemos visto oradores a tanta altura como el Sr. Ruiz Zorrilla estuvo ayer tarde: los aplausos de todos los lados de la Cámara, excepción hecha de la minoría alfonso, se sucedían con frecuencia bastante a probar que el discurso del señor presidente del Consejo, así por su forma como por la índole de las declaraciones y asertos que en su fondo contenía, era oído con sumo agrado por todos los diputados que de liberales se precian.

SECCION OFICIAL.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

(Continuación.)

Art. 76. Al principio de cada año nombrará el ayuntamiento uno o dos concejales, que, con el nombre y carácter de procuradores síndicos, representen a la corporación en todos los juicios que deba sostener en defensa de los intereses del municipio, ejerzan la censura y revisión de todas las cuentas y presupuestos locales, y llenen las especiales funciones que por leyes y reglamentos les están encomendadas en la provincia de Puerto-Rico.

Art. 77. Habrá un solo síndico en los ayuntamientos que se compongan sólo de siete concejales, y dos en los que pasen de aquel número, encargándose el primero de la parte contenciosa y el segundo de la parte económica.

Art. 78. Los trámites de instrucción y discusión no servirán nunca de excusa a los ayuntamientos para dilatar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes les imponen.

CAPITULO III.

De las funciones administrativas de los alcaldes, tenientes y regidores.

Art. 79. El alcalde es el presidente de la corporación municipal, y lleva su nombre y representación en todos los asuntos, salvo las facultades concedidas a los síndicos.

Como jefe de la administración municipal, es el encargado de la publicación y ejecución de los bandos y disposiciones convenientes, y procederá en forma legal y con imposición de las penas señaladas en el art. 56.

Todos los dependientes de los ramos de vigilancia y de policía urbana y rural están bajo su autoridad y mando, y puede, mediante justa causa probada, castigarlos con suspensión de empleo y sueldo hasta por 30 días, y proponer su destitución al ayuntamiento.

Art. 80. Donde sólo hubiere un teniente, se dividirá el distrito municipal en dos secciones próximas, igualmente entre sí y en población. Donde los tenientes fueren dos o más, se dividirá el distrito en tantas secciones como sea el número de aquellos. En el primer caso el alcalde y teniente tendrán cada uno a su cargo una sección; en el segundo caso las secciones serán repartidas solo entre los tenientes.

La división en todo caso será propuesta en junta de alcaldes y tenientes, y acordada por el ayuntamiento, dando cuenta inmediatamente a la diputación provincial y gobernador superior civil para su consentimiento.

Art. 81. Los tenientes ejercerán cada uno en su sección las funciones que la ley atribuye al alcalde, bajo la dirección de éste, como jefe superior de la administración municipal.

Art. 82. Los distritos municipales y sus secciones se dividirán en barrios, cada uno de los cuales quedará íntegramente comprendido en una sola sección.

Art. 83. En cada barrio habrá un alcalde del mismo que, bajo la dependencia del teniente respectivo, ejercerá la parte de funciones administrativas que éste le delegue.

Art. 84. Los alcaldes de barrio serán nombrados por el ayuntamiento de entre los vecinos con residencia en la demarcación respectiva.

Estos cargos durarán dos años.

Comenzó el orador por leer las preguntas del Sr. Bugallal a fin de que pudiera juzgarse si era o no cumplida la respuesta, y recordando después lo dicho en otras ocasiones sobre las reformas de Ultramar, evidenció que no existe el menor desacuerdo entre lo manifestado entonces por el gobierno y lo que ahora comienza a poner en práctica. El gobierno, a quien nadie puede negarle, sin pecar de injusto, franqueza en su conducta y consecuencia con sus compromisos, ha declarado que no hará reformas en Cuba mientras allí exista un solo insurrecto con las armas en la mano; tenía prometidos, si a la pacífica y leal isla de Puerto-Rico, para cuando asuntos más urgentes lo permitieran, el planteamiento de la ley municipal que en la metrópoli rige y el proyecto de ley de abolición de la esclavitud. Ya ha llegado el momento oportuno y pública luz ha visto el decreto concerniente al primer punto, decreto constitucional y en nada desprovisto de los fueros del Parlamento, al que tantas pruebas de respeto tiene dadas el actual ministerio. En cuanto al segundo punto, a la abolición de la esclavitud, el Sr. Ruiz Zorrilla anunció para dentro de un breve plazo la presentación del correspondiente proyecto de ley, siendo saludada por el Congreso esta consoladora y trascendental noticia con atronadoras salvas de aplausos.

Pero estas medidas, dignas de un gobierno sinceramente inspirado en los principios democráticos, sólo se refieren, téngase bien presente, a Puerto-Rico, provincia que por su sensato y patriótico proceder merece ser tratada de diferente modo que Cuba; igualar en estos momentos la condición de ambas no ha de hacerlo el gobierno; demorar las reformas que anhela Puerto-Rico sería a todas luces inícuo; hacerlas extensivas a Cuba, una debilidad y una inconveniencia que no cometerán nuestros amigos, tan españoles como el que más, no obstante la sencilla credulidad de una parte del público, que da oídos a las indignas invenciones, con que ciertas gentes procuran, a falta de armas más nobles, minar la existencia del gobierno.

Pero dícese que la resolución de conceder reformas a Puerto-Rico ha causado alarmas en las provincias, y a este propósito, el Sr. Ruiz Zorrilla, abordando la cuestión de orden público, cuya explicación quisiera haber reservado para más adelante, recordó los diversos medios de que se ha echado mano para difundir el pánico, lastimar el crédito nacional y quebrantar al gobierno; mencionó la falsa noticia de no haberse cubierto

el empréstito; las no menos falsas de la inmediata sublevación de las provincias Vascongadas en sentido carlista, y de Sevilla, Barcelona y otras ciudades en sentido republicano.

Pues bien: el empréstito está cubierto; la sublevación de los intrasiguentes, del todo sofocada en Andalucía; la de los carlistas, decreciendo en Cataluña; en las provincias Vascongadas solo hay unas partidas insignificantes, y este estado de rebelión, aunque ya decadente, desaparecerá del todo tan luego como los ciudadanos recien llamados al servicio de las armas ingresen en las filas de nuestro leal y valiente ejército para defender la libertad y las instituciones.

La cuestión de orden público no tiene, pues, la gravedad que algunos pretenden darle. Vendrá a dársele, quizá, el planteamiento de las reformas ofrecidas a Puerto-Rico? Eso no puede creerlo ninguna persona sensata; si con este nuevo pretexto se provocan alarmas, es que hay quien tiene interés en agitar los ánimos para envalentonar a los débiles y dar esperanzas a los despechados. Y si la agitación ficticia que presentamos se tradujera en hechos, sobre todo después de haber dado su fallo el Parlamento, cualquier tentativa sería fácilmente dominada y además nos daría derecho a calificar de malos españoles a los instigadores de motines, que por tales medios trataran de quitar prestigio al gobierno: esos serían los malos españoles, esos que apellidan filibusteros a los actuales ministros, demostrando así, como dijo muy oportunamente el señor Ruiz Zorrilla, que por su parte no saben defender nada si no se les paga con dinero. Tan cobardes imputaciones indignaban antes al orador, pero al reparar que los que tal dicen son los mismos de siempre, los que han calumniado a Mendizábal, los que han calumniado a Espartero, el Sr. Ruiz Zorrilla no podía extrañar, en su modestia, que digan lo mismo de su persona los que, según él, valen más, (infinitamente menos, rectifiquemos nosotros) y sin embargo no han logrado elevarse tanto.

Antes de terminar su admirable peroración, el señor presidente del Consejo dejó consignado que el gobierno, al acordar las reformas para Puerto-Rico, se inspira precisamente en el deseo de conservar aquella provincia ultramarina, y en la convicción de que le dispensa un gran beneficio; aseguró que no hay fundamento serio para creer que por semejante motivo se altere el orden público, y aconsejó a nuestros correligionarios políticos que no dejen explotar su españolismo

Art. 85. Los alcaldes y tenientes necesitan licencia del ayuntamiento para ausentarse de su distrito por más de ocho días.

En ningún caso dejarán de dar aviso previo al que haya de reemplazarlos, comunicándolo además oficialmente al ayuntamiento cuando la ausencia exceda de dos días.

La licencia concedida y el nombre del que ha de reemplazar al ausente serán comunicados al gobernador superior civil en la fecha de aquella.

Art. 86. Los alcaldes de barrio no pueden ausentarse nunca del de su cargo por más de 24 horas sin licencia del teniente alcalde de su sección, quien designará persona que le reemplace durante su ausencia.

Art. 87. Los alcaldes, tenientes y regidores están obligados a concurrir puntualmente a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, no impidiéndose solo justa causa, que acreditarán en su caso.

Art. 88. Los tenientes reemplazarán al alcalde con todas sus atribuciones, y los regidores a los tenientes por el orden establecido en el art. 35, en casos de ausencias, enfermedades o vacantes interinas.

Art. 89. No pueden los concejales ausentarse en día de sesión ordinaria o extraordinaria, ni por más tiempo que el que medie entre dos ordinarias, sin licencia del ayuntamiento.

Sólo se concederán licencias a la vez a la cuarta parte del número total de concejales.

Art. 90. Los alcaldes, tenientes y regidores no tendrán como tales tratamiento alguno especial.

CAPITULO IV.
De los presupuestos municipales.

Art. 91. Los ayuntamientos formarán todos los años un presupuesto que comprenda los gastos que por cualquier concepto hayan de hacer, y los ingresos destinados a cubrirlos. Al efecto constituirán de su seno una de las comisiones permanentes de que se habla en el art. 75.

Art. 92. Los presupuestos anuales ordinarios contendrán precisamente las partidas necesarias, según los recursos del municipio, para atender y llenar las obligaciones a que se refiere el párrafo primero del art. 52 de este decreto; los servicios establecidos de entre los que, según el art. 51, sean de la competencia de los ayuntamientos; los gastos que, en virtud del párrafo segundo del citado art. 52, expresen clara y terminantemente las leyes como obligaciones, y además los siguientes:

1.º Mantenimiento del culto y de los ministros de la religión católica en la forma que las leyes determinen.

2.º Personal y material de las dependencias y oficinas.

3.º Pensiones, censos y cargas de justicia que pesen sobre fondos municipales, así como las deudas reconocidas y liquidadas, y réditos y consecuencias de contratos.

4.º Fomento del arbolado.

5.º Medios preventivos y de socorro contra incendios y de salvamento en poblaciones marítimas.

6.º Suscripción al Diario oficial de la provincia.

7.º Contingente del municipio en el repartimiento provincial.

8.º Una partida para imprevisos y calamidades públicas, que no exceda del 10 por 100 del presupuesto de gastos.

9.º Otra partida para el establecimiento, conservación y aumento de la biblioteca municipal en todos los distritos donde la población esté agrupada y llegue a 300 vecinos.

10.º Las impresiones y anuncios y todos los demás gastos que las leyes citadas y terminantemente expresen como obligatorios o que sean precisos para su cumplimiento en lo que al municipio se refiera.

mo por los que quieren dar carácter de cuestión nacional a la que no lo es, porque en nada afecta a la integridad del territorio.

El señor presidente del Consejo acabó su discurso en medio de una ovación indescriptible, declarando que este gobierno no desistirá de las proyectadas reformas sino ante la voluntad de la corona o el voto del Parlamento.

Leíose acto continuo una proposición pidiendo al Congreso que declarara haber oído con agrado las palabras de salvación pronunciadas por el presidente del Consejo, y la apoyó el Sr. Becerra con sentidas y patrióticas frases, haciendo notar la decepción que van a sufrir nuestros adversarios, que nos consideraban profundamente divididos, al ver cómo, por el maravilloso influjo de los principios, todos los radicales, y aun puede decirse que todos los revolucionarios demócratas, estamos identificados en una misma aspiración. El Sr. Becerra hizo asimismo ardientes protestas en pro de la integridad de la patria, mejor garantida con las concesiones que el derecho exige, que no con el sistema de opresión y fuerza, con el cual están encariñados los conservadores de todos matices.

El voto de confianza fué tomado en consideración por 182 diputados, entre los cuales figuraba la minoría republicana. En contra votaron 6 alfonsoes. Se comprende.

Hoy debe continuarse este debate, iniciado bajo tan felices auspicios para la causa de la libertad y del derecho.

SENADO.

Una hora más tarde de la que estaba anunciada, se abrió la sesión de ayer, continuando el Sr. Cala su interrumpido discurso en contra de la totalidad del proyecto de ley de obligaciones eclesiásticas.

El Sr. Díez (D. Eugenio) fué el encargado de contestar al discurso del orador republicano, llenando su cometido de un modo satisfactorio, que añadió un laurel más a su corona de hombre parlamentario, que no desmerece en nada de la que ha adquirido como profundo jurista y abogado distinguido.

Laudable fué su manera de principiar, apartándose de la costumbre seguida hasta aquí en esta clase de discusiones, en las que se empieza por hacer profesión de fe, para después contradecirse en el mismo discurso, como los republicanos, o para desmentir sus palabras con sus obras, como ya lo hemos visto hacer a los moderados. El Sr. Díez no alardeó de católico, pero proclamó como la

Parte que concedan las leyes en la expedición de documentos de vigilancia, licencias de caza y pesca, y de navegación y flote de los ríos y aprovechamiento de aguas.

Y otros análogos.

Art. 93. En ningún caso pueden ser objeto de arbitrios los servicios siguientes:

Aprovechamiento y abastecimiento de aguas para uso comunal.

Alumbrado público.

Limpieza.

Aceras y empedrados.

Vigilancia pública.

Beneficencia.

Instrucción pública elemental.

Y otros de igual naturaleza.

Art. 90. En el replanteo que se dicte para la aplicación del presente decreto se fijará la forma de realizar los municipios los ingresos con sujeción a las bases siguientes:

1.º Determinación de los arbitrios por el ayuntamiento.

2.º Pago de las multas en un papel especial creado al efecto.

3.º Prisión de la riqueza imponible para el repartimiento general por los mismos contribuyentes reunidos en secciones.

4.º Distribución entre las secciones del importe total del repartimiento hecho por el ayuntamiento.

5.º Nombramiento por sorteo de síndicos en cada sección para fijar lo que corresponde por el repartimiento general a cada individuo, y apelación al ayuntamiento del ac. erdo de los síndicos.

6.º Determinación por el ayuntamiento de las especies que han de ser objeto del impuesto de consumos, de la forma en que ha de tener lugar y de las tarifas por que se ha de registrar su exacción, las cuales no excederán en ningún caso del 25 por 100 del precio medio del artículo en la localidad respectiva.

7.º Recurso de agravios ante la diputación provincial a los que se crean perjudicados por los acuerdos del ayuntamiento. Este recurso no suspenderá los efectos del acuerdo reclamado.

8.º Acción pública para acudir a la diputación provincial y al alcalde o delegado del gobierno contra la ilegalidad o extralimitación que el ayuntamiento cometa al desguisar los arbitrios y artículos para el impuesto de consumos, al determinar las tarifas y modo de percepción, o al ejecutar las demás operaciones que les están confiadas.

9.º Publicidad de todas las operaciones.

Art. 100. Terminado el año económico, quedan anulados los créditos abiertos y no invertidos durante su ejercicio.

Durante el período de ampliación se determinarán las operaciones de cobranza de los arbitrios pre-supuestos, y las de liquidación y pago de los servicios realizados durante el año. Las resultas que queden después de este período serán objeto de un presupuesto adicional, previas las consiguientes liquidaciones, que tendrán lugar dentro del mes siguiente.

Art. 101. Cuando para cubrir atenciones imprevisas, satisfacer alguna deuda, o para cualquier otro objeto de importancia no determinado en el presupuesto ordinario, sean insuficientes los recursos consignados en éste, los ayuntamientos formarán un presupuesto extraordinario en la misma forma y por el mismo procedimiento determinado para los ordinarios.

Art. 102. Las deudas de los pueblos que no estuvieren aseguradas con prenda o hipoteca no serán

mejor de todas las religiones la cristiana, y se declaró partidario de ella, tal como se predicaba en los primeros siglos. Después del concilio de Nicea, vemos surgir una nueva religión que, amparándose bajo el nombre del cristianismo, se aparta en un todo de las máximas de Jesucristo, y llena de orgullo y de soberbia, rodea a sus ministros de fausto y les hace dueños de los mejores y más pingües patrimonios. Esto defienden los que hoy impugnan el proyecto de arreglo del clero, y esto censura y ataca, como no podía menos de hacerlo así, el Sr. D. Eugenio Díez.

El sexto y último turno en contra fué consumido por el Sr. Barzanallana, que examinó la cuestión bajo el punto de vista económico, defendiendo la amortización de la propiedad. Con gusto hemos oído siempre a su señoría, por más que distemos mucho en nuestras respectivas ideas políticas, porque suele tratar cualquier asunto con gran estudio y profundidad, pero en la ocasión presente, no solo defendía una causa perdida, sino que atacó el proyecto en uno de sus artículos más dignos de alabanza, en el que fija el término de tres años para que el clero cambie su propiedad inmueble por títulos de la deuda, creándose así una renta correspondiente a su capital.

El Sr. D. Juan Bautista Alonso pronunció pocas palabras en contestación al señor Barzanallana, por ser hora bastante avanzada, dejando para hoy la terminación de su discurso.

LA REUNION DE LA GRANDEZA.

Anuncia un diario que en breve se reunirán los grandes de España, convocados por su diputación para prestar su apoyo incondicional en lo relativo a reformas de Ultramar al Centro hispano-ultramarino.

Muy bien.

Añade *La Iberia*, periódico a que aludimos, que pueblo, ejército, clero y aristocracia, todos unidos y laizados por el patriotismo, se apresuran a defender la integridad nacional. Y termina diciendo:

«¡España ha despertado! ¡Ay de sus espíritus hijos!»

Muy bien, muy bien.

Vamos por partes.

Que se reúna la grandeza de España.

¿Y qué? ¿Vivimos quizá en los tiempos de la oligarquía? ¿Sospechan los diarios de la reacción que la relumbrante frase de *grandeza de España* ha de imponer hoy al momento a su gobierno?

Revuelvan las páginas de la historia.

En unas épocas, el Pontífice domina al rey, el rey es víctima de la clerical, y viene una excomunion, alcanza un anatema, si

exigidas a los ayuntamientos por los procedimientos de apremio.

Cuando algún pueblo fuere condenado al pago de una cantidad, el ayuntamiento, en el término de 10 días después de ejecutoriada la sentencia, procederá a formar un presupuesto extraordinario, a no ser el que acordó conveña en avasalar el cobro de modo que puedan consignarse en los presupuestos ordinarios sucesivos las cantidades necesarias para el pago del capital y réditos estipulados.

Art. 103. Si los recursos de que puede disponer el pueblo no fueren suficientes para cubrir sus deudas, o no creyere el ayuntamiento posible recargar las cuotas impuestas a los vecinos, y los acreedores no se conformaran con los medios que se les ofrecen para solventar sus deudas, se remitirá el expediente a la diputación provincial, a fin de que, oyendo a los interesados, disponga lo conveniente para que tengan efecto los pagos, sin perjuicio de la competencia de los tribunales y juzgados ordinarios para resolver acerca de la legitimidad y prelación de los créditos.

Art. 104. No pueden ser aplicados al pago y cumplimiento de servicios u obligaciones permanentes los recursos procedentes de arbitrios de carácter eventual y transitorio.

Art. 105. El proyecto de presupuesto, ya sea ordinario, adicional o extraordinario, aprobado por el ayuntamiento, previa censura del síndico, quedará expuesto al público en la secretaría del ayuntamiento cuatro meses antes de terminar el año económico, por espacio de 15 días desde la fecha en que se haga el anuncio en la forma ordinaria.

Art. 106. Para hacer efectiva la recaudación serán aplicables los medios de apremio en primeros y segundos contribuyentes dictados en favor del Estado.

CAPITULO V.
De la recaudación, distribución y cuenta de los fondos municipales.

Art. 107. La recaudación y administración de los fondos municipales está a cargo de los respectivos ayuntamientos, y se efectuará por sus agentes y delegados.

Art. 108. La distribución e inversión de fondos se acordará mensualmente por el ayuntamiento con sujeción a los presupuestos.

Art. 109. La ordenación de pagos corresponde al alcalde.

La intervención estará a cargo del contador, donde la hubiere, y en su defecto se ejercerá por el regidor elegido por el ayuntamiento.

Art. 110. Los ayuntamientos nombran y separan libremente a los depositarios y agentes para la recaudación de todas las rentas y arbitrios del municipio.

A las mismas corporaciones corresponden también señalar la retribución que aquellos empleados hayan de disfrutar y las fianzas que deban prestar.

Si en el pueblo no hubiere persona que quiera encargarse de la custodia de fondos, el cargo de depositario será declarado concejil y obligatorio, pero no llevará aneja la prestación de fianzas.

Art. 111. Los agentes de la recaudación municipal son responsables ante el ayuntamiento, cuando éste en todo caso civilmente para el municipio, sin perjuicio de los derechos que contra ellos pueda ejercitar.

Art. 112. Todos los fondos municipales ingresan precisamente en la caja del ayuntamiento, cuyas llaves custodiara el depositario, el ordenador y el interventor.

Art. 113. El contador o el concejal-interventor, auxiliado, si fuere necesario, por el secretario y de-

1872

PINILLOS, ALCALA, 17. —154